



COMUNICADO DE PRENSA URGENTE



LA PLATAFORMA DE PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL DENUNCIA UNA NUEVA AGRESIÓN A UNA EDUCADORA SOCIAL EN EL PAÍS VALENCIÀ:

“NO HABRÁ AGRESIÓN EN EL SECTOR SOCIAL SIN RESPUESTA”

Volvemos a lamentar una agresión a una compañera en su puesto de trabajo. La violencia contra los profesionales del sector social ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un problema estructural. Según el Informe Estatal sobre Violencia y Desprotección en el Sector Social (2025), el 50% de las trabajadoras ha sufrido agresiones verbales, el 25% amenazas y el 10% agresiones físicas.

No se trata de incidentes puntuales, sino de la consecuencia de un sistema al límite: el colapso administrativo, la falta de recursos, la precariedad laboral —con un 70% del personal sin estabilidad— y el aumento de la vulnerabilidad social están incrementando la conflictividad en la atención directa.

En el ámbito de la infancia y adolescencia, la situación en el País Valencià es especialmente crítica. En 2024 se registró un repunte histórico de agresiones, con un aumento de la conflictividad en centros de recepción y acogida. Los recursos están masificados y, en muchos casos, duplican su capacidad autorizada:

- Torre de Alborache (València): 84 plazas autorizadas / 120 ocupadas
- “Alacant”: 24 plazas / media real de 54
- Verge de Lledó I (Castellón): 12 plazas / 24 ocupadas

La creación de macrocentros no ha resuelto el problema: la masificación dificulta la convivencia, impide el trabajo en grupos educativos e imposibilita la atención individualizada que establece la normativa.

Los centros de menores se han convertido en espacios de alta tensión debido a la llegada de perfiles de elevada complejidad, la falta de personal especializado —especialmente en salud mental—, el hacinamiento y los retrasos administrativos en la gestión de menores extranjeros no acompañados.

En las residencias públicas de la Generalitat Valenciana no se respetan las ratios, y se trabaja en condiciones precarias. Esto lleva a la saturación de las profesionales y de los servicios, como consecuencia la atención hacia la infancia y la adolescencia se deteriora. Las bajas laborales también han aumentado, principalmente por estrés. Las bolsas de trabajo no están sirviendo para cubrir sustituciones de vacaciones y de incapacidad temporal, lo que condiciona gravemente el funcionamiento de los centros. Especialmente grave es la situación de las residencias de menores, diversidad funcional y mayores en la provincia de Alicante, que acumulan meses de impagos de complementos salariales, trienios y carrera profesional. Asfixiando recursos que acabarán privatizando, como ya están haciendo en Valencia y Castellón.

A esta situación se suma el bloqueo de los pliegos en los centros concertados —sin renovar en algunos casos desde 2019—, lo que impide mejoras salariales, la cobertura de bajas y la dotación adecuada



COMUNICADO DE PRENSA URGENTE



de recursos. Tal y como viene pasando en los recursos de personas mayores, pendientes de licitación a pesar de los anuncios de que se han puesto al día.

En este contexto, las y los profesionales del sector están iniciando conversaciones para promover una huelga general del sector social como respuesta a la falta de soluciones.

Ante este escenario, la Plataforma de Profesionales del Sector Social exige medidas urgentes: refuerzo de plantillas, ratios dignas, recursos especializados, actualización de los conciertos, protocolos eficaces frente a agresiones y garantías reales de seguridad y protección jurídica.

Lo que ocurre en los centros de València, Alicante y Castellón es reflejo de un abandono institucional sostenido. La violencia no puede normalizarse como parte del trabajo.

Por dignidad profesional y por justicia social, exigimos un sector social seguro, digno y respetado.
Porque lo social es esencial.